

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MODELO ECONOMICO CHILENO PARA
DOCUMENTO CONFERENCIA PROGRAMA P.5.

J. Schatan
21/08/95

1. EL PANORAMA MUNDIAL.

Desde el fin de la Segunda Guerra el mundo presencia un fortalecimiento del sistema capitalista, liderado por los EE.UU. - principal potencia militar y económica - con características de creciente internacionalización de los capitales, globalización del comercio y penetración de modos de consumo/cultura/valores de las naciones centrales del Norte en las periféricas débiles del sur.

En las dos décadas recientes el capitalismo ha adquirido características agresivas y de corte neoliberal, desplazando los viejos esquemas del Estado Benefactor propios de la socialdemocracia europea o de la era del Nuevo Trato de Roosevelt. Los exponentes más preclaros de esta nueva forma del capitalismo han sido los regímenes de la Sra. Thatcher en Inglaterra y de R.Reagan en los EE.UU., que dominaron la década de los 80. Pero en Chile ese modelo se comenzó a aplicar incluso antes, inmediatamente después del Golpe Militar.

El modelo neoliberal, con sus severos ajustes económicos, significó de una parte la primacía incontestable del mercado - o sea de las fuerzas empresariales, financieras y especulativas que lo mueven - en la vida económica y social de estos países, con una concentración creciente de la riqueza y los ingresos en manos de una proporción cada vez menor de empresas y personas. Significó, a la vez, un duro sacrificio para las grandes mayoría que, en el caso de nuestro país, perdieron buena parte de los beneficios sociales y económicos conquistados en períodos anteriores. Ello, en buena medida, por el debilitamiento del rol del Estado, que pasó a tener un carácter meramente subsidiario y sin capacidad de mediar entre los poderosos y los desvalidos, en favor de estos últimos, como había sido el caso por largo tiempo.

II. La inserción de Chile en la economía mundial.

La polarización mundial se ha intensificado con el incesante cambio tecnológico, que obliga a las empresas a fusionarse en unidades de tamaño y potencia cada vez mayor y a las naciones a vincularse en bloques regionales de comercio. Chile no se ha sustraído a esta tendencia; por el contrario, ha emprendido con vigor inusitado la tarea de insertarse en la economía mundial, intentando formar parte del NAFTA, en la parte norte del continente americano, del MERCOSUR, en América del Sur, y establecer arreglos especiales con la Comunidad Económica Europea y con el bloque de países del Pacífico, especialmente los asiáticos. Tarea nada despreciable para una nación pequeña, con resultados que, sin embargo, no parecen nada de claros, pese a la abundante argumentación en favor de dicha irrestricto acoplamiento.

Se da como fundamento principal para buscar esa inserción el hecho mismo de la pequeñez geográfica y poblacional de Chile. Dado el reducido tamaño del mercado interno, no queda otro camino - se dice - que el de buscar mercados afuera para poder dar cabida a las nuevas tecnologías, que se justifican y son rentables sólo cuando las escalas de producción son lo suficientemente grandes. Pero la internacionalización de una economía como la chilena significa necesariamente entregar una cuota muy grande de la soberanía nacional, entendida ésta como la posibilidad de adoptar decisiones autónomas en diversos campos del quehacer nacional. Las cuestiones financieras y comerciales, con flujos de capital externo cada vez mayores, comienzan a resolverse principalmente en otras partes del mundo. Los tratados, en general, fijan reglas que aseguran el libre tránsito de mercancías, servicios y capitales (no de personas), lo cual puede significar que algunos sectores de actividad económica queden condenados a desaparecer, con graves consecuencias sociales.

El caso de Chile es muy claro al respecto. La apertura ha traído como consecuencia la llegada de grandes volúmenes de capital extranjero, para ser invertido principalmente en actividades extractivas o con muy bajo grado de procesamiento - minería, pesca, forestal, productos hortofrutícolas - con fines de exportación, que en general proporcionan poco empleo (con excepción de la fruticultura) y que degradan los recursos naturales. La

enorme cuantía de las divisas recibidas ha significado una presión revaloratoria del peso, lo que ha hecho más baratas las importaciones de toda clase de bienes, que han empezado a competir favorablemente con los similares producidos en Chile, especialmente en el sector de la agricultura, debido a los altos subsidios que muchos países exportadores otorgan a sus producciones agrícolas. Al mismo tiempo, esa revaluación del peso está comenzando a afectar también a muchos exportadores, cuyos retornos se han comprimido en términos reales; a fin de no disminuir sus ganancias o aminorar su deterioro, los productores para la exportación adoptan toda suerte de medidas para comprimir los salarios. Hemos visto así como, en el curso de los últimos dos años, el sector agrícola ha eliminado más de 60 mil puestos de trabajo.

El costo de la inserción, desde el punto de vista social, puede llegar a ser muy elevado, ya que estaremos cambiando actividades muy extensivas en capital e intensivas en mano de obra, como son la agricultura tradicional y la manufactura liviana, por actividades, como la minería, que requieren de grandes capitales para proporcionar muy poco empleo. El caso más relevante es el de la minera de cobre Collahuasi, que proyecta invertir tres mil millones de dólares para proporcionar apenas dos mil empleos directos. Es decir, una exigencia de capital de dos millones de dólares por puesto de trabajo; en una empresa manufacturera pequeña, en cambio, el capital por puesto de trabajo probablemente no supere los 30-40 mil dólares: ¡ 50 a 70 veces menos !

Este afán insercionista a ultranza no obedece, pues, a una visión equilibrada del desarrollo a largo plazo de Chile. Se procura alcanzar elevadas tasas de crecimiento económico global, de las exportaciones (y por ende de las importaciones) de bienes y servicios; se procura, también, que Chile se convierta en un gran centro financiero para América del Sur y que constituya un punto de tránsito para las mercancías que del lado atlántico de este subcontinente van a Asia, o las que vengan de allí con destino a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero no queda para nada claro cual va ser la estructura ocupacional ni los niveles de remuneración que prevalecerán en el futuro. Con toda probabilidad, se reforzará el sector empresarial (incluyendo al personal calificado y ejecutivo, además de los

propietarios)dedicado a las exportaciones, a los servicios financieros o computacionales, a los servicios suntuarios y a la construcción de lujo para las clases acomodadas, con una fuerte imbricación entre capital transnacional y capital de chilenos, mientras que se debilitarán muchos otros sectores, arrojando a buena parte de la población empleada en ellos a la cesantía, el subempleo o el empleo de menores remuneraciones. Tal como ha ocurrido en los Estados Unidos, probablemente proliferarán las actividades gastronómicas, tanto de comidas rápidas como de aquellas de más categoría. Los afortunados que no queden desocupados pasarán a engrosar las filas de los "preparadores de sandwiches". Obviamente, ello se traducirá en un incremento notable de la brecha social, fenómeno que ya se está observando con claridad en Chile, como demostramos a continuación.

III. Pobreza y distribución del ingreso.

Las encuestas oficiales de medición de la pobreza en Chile muestran que el número de personas pobres e indigentes en nuestro país sigue constituyendo poco menos de un tercio de toda la población, no obstante los esfuerzos desplegados por los gobiernos democráticos en el curso de los últimos cinco años. Según la encuesta CASEN de fines de 1994, todavía permanecían en la miseria alrededor de cuatro millones de personas. Además, otros cuatro millones estaban en situación de riesgo y gran vulnerabilidad, al percibir ingresos escasamente superiores al determinados por una línea de pobreza bastante magra, de \$ 15.000 mensuales por persona.

Con mayor precisión, podemos señalar que, hacia fines de 1994, la situación era la siguiente: un millón y medio de personas recibían, en promedio, ingresos equivalentes a menos de tres cuartos de una canasta básica alimentaria; es decir, no les alcanzaban esos ingresos ni siquiera para comer adecuadamente, sin considerar ningún otro gasto; otros tres millones percibían ingresos monetarios equivalentes a menos de dos canastas básicas por persona, o sea menos de \$30 mil por mes; este es el grupo que se denomina "pobres no indigentes"; finalmente, cuatro millones percibían ingresos equivalentes de entre dos y tres y media canastas alimentarias, o sea entre 30 y 52 mil pesos por persona. En suma, podemos afirmar que más de ocho millones de habitantes de este país viven en condiciones de miserias a muy estrechas. En el otro extremo, el diez por ciento más rico

tiene ingresos equivalentes a 40 veces el del decil más pobre. O sea, a la pobreza absoluta se une la pobreza relativa.

Esta brecha social está aumentando, pese al elevado crecimiento económico que se ha experimentado en años recientes. La frase de que "los ricos se tornan más ricos y los pobres más pobres" se revela válida por los datos empíricos disponibles. Las cifras de la CASEN 1994 son reveladoras también de la falsedad del argumento que esgrime la derecha empresarial y política en cuanto a que el crecimiento económico global constituye el único camino para derrotar la pobreza, y que para ello resulta indispensable terminar con cualquier intento redistributivo. En los meses recientes la derecha, liderada por El Mercurio como de costumbre, ha ondeado insistente y majaderamente acerca de este postulado. Pero la realidad es pertinaz: el chorreo sólo funciona para arriba, pero no para abajo. La razón principal para que el número de pobres haya disminuido de manera acentuada entre 1987 y 1992 radica en el decrecimiento de la desocupación, que alcanzaba tasas muy elevada a mediados de los 80. Una vez alcanzado un piso de entre 5 y 6%, ya no puede esperarse que mucho más gente de las familias pobres se incorpore al mercado del trabajo aumentando así el ingreso familiar y permitiendo a los hogares sobrepasar la línea de pobreza. Eso es precisamente lo que ocurrió entre 1992 y 1994.

La estructura distributiva en este país es tan inequitativa, que, si no se adoptan medidas especiales para transformarla, los sectores más ricos seguirán apropiándose de la parte principal del producto generado por el conjunto de la sociedad. Los empresarios se consideran "benefactores" porque dan empleo, ¡como si ellos pudieran realizar por sí mismos, sin ayuda de los trabajadores, las distintas fases del proceso de producción o distribución de bienes y servicios! Se argumenta que es indispensable aumentar la productividad del trabajo - mediante incorporación de tecnología y cambios en los métodos de producción - para poder mejorar las condiciones salariales; pero no se dice que el beneficio neto de los aumentos de productividad se reparte de manera muy desigual entre trabajadores y ejecutivos o dueños de las empresas. Las estadísticas sobre remuneraciones que llevaba hasta hace poco el INE mostraban cómo las remuneraciones del sector "gerentes" se habían

elevado a una tasa que era el doble de la correspondiente a los trabajadores de menor rango. Es decir, al interior de la masa salarial global también hay una distribución muy inequitativa.

Existen una serie de mecanismos por los cuales los estratos más ricos se apoderan del ingreso del resto de la población. Sea por la vía de pagar bajos salarios, o pagar poco por los bienes y servicios vendidos por los pequeños productores - campesinos, artesanos, pescadores, pirquineros, talleres industriales y de servicios, trabajadores por cuenta propia, etc. - o por la de cobrar mucho por los bienes y servicios vendidos a esta gente (tarifas de servicios eléctricos, teléfonos y otros, tasas de interés por deudas comerciales, mayores precios en los negocios ubicados en sectores populares, etc.), el hecho concreto es que las franjas pobres de la población son castigadas doblemente por el sistema, haciendo casi imposible que puedan salir de su estado de pobres en sus diversos grados e intensidades.

Obviamente, el problema de la pobreza no se reduce a la magnitud de los ingresos percibidos, aunque éstos constituyan tal vez la parte medular. Es el entorno total el que cuenta: la vivienda, la salud, la educación, los servicios sanitarios y de transportes, el acceso a la cultura y la entretención, por citar algunos aspectos, son también de naturaleza miserable. En las poblaciones periféricas pobres el desempleo es más alto, la violencia y la delincuencia también son mayores; en fin, las disimilitudes entre el modo y calidad de vida entre unos y otros grupos de población son tan grandes, que no parecen pertenecer a la misma sociedad. Es, en suma, una especie de "apartheid", que se ha venido agravando con el curso de los años, muy especialmente a partir de la dictadura militar y la instauración del modelo neoliberal.

IV. La degradación ambiental.

El modelo capitalista de acumulación excesiva del producto social en pocas manos conlleva, además de miseria para los muchos, un elevado nivel de contaminación ambiental y destrucción de recursos naturales. La pérdida de bosques, la contaminación de aguas, aire y suelos, la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, entre otros fenómenos que amenazan la vida en el planeta, se originan fundamentalmente

en el elevado consumo de toda clase de bienes por los grupos de mayores ingresos. Está científicamente comprobado que son los países industriales del Norte - incluido los de Europa del Este - los responsables principales de tales procesos destructivos. Es que la producción y transporte de cualquier artículo significa, en alguna medida, la emisión de desechos sólidos, líquidos o gaseosos, que la naturaleza no puede reciclar cuando se pasa de cierto límite. Ya la Tierra ha pasado ese límite. La actividad desarrollada por esa parte de la humanidad en los últimos 200 o 300 años, desde la Revolución Industrial, acelerada en los 50 años transcurridos desde la II Guerra por el avance tecnológico, y combinada con un rápido crecimiento demográfico en todo el mundo, ha significado una verdadera catástrofe ambiental, de la cual estamos apenas comenzando a darnos cuenta.

Resulta claro, entonces, que un modelo económico que tiende a privilegiar el consumo indiscriminado por parte de los grupos pudientes, con una publicidad incesante que empuja a los menos pudientes a intentar consumir lo mismo, constituye un modelo inaceptable. Hoy día presenciemos un grado de irracionalidad increíble en el modo en que se organizan y funcionan las sociedades, basadas en el despilfarro de recursos que, en su mayor parte, son no renovables; es decir, una vez perdidos ya no se pueden recuperar o recomponer. Es el caso de los bosques, por ejemplo, cuya destrucción va acompañada por la pérdida definitiva de numerosas especies animales y vegetales.

En nuestro país se repite el fenómeno global. La voracidad empresarial no trepida en liquidar los bosques nativos para exportar astillas al Japón, en amenazar las reservas pesqueras por la sobreexplotación para la fabricación y exportación de harina de pescado, o en estimular el consumismo de toda clase de artículos innecesarios, cuya producción causa contaminación en alguna parte del mundo. La acumulación de ingresos se traduce en un aumento desmedido del parque automotriz, con los consiguientes problemas de congestión y polución en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, la pobreza extrema en que vive buena parte de la población contribuye a incrementar la contaminación, especialmente de las aguas; estos segmentos, a la vez, son las mayores víctimas de la degradación de los recursos naturales.

V. El P.S. y el modelo económico.

Nos enfrentamos, pues, frente al dilema de decidir qué país queremos tener. Parece ilusorio pensar en la posibilidad de cambios dramáticos de conducta humana en el corto plazo, ya que, al parecer, los seres humanos sólo reaccionan cuando el agua les llega más arriba del cuello. Para entender la naturaleza de los fenómenos descritos, es necesario que el Estado recupere el perdido rol de orientador del desarrollo a largo plazo, y que los hombres y mujeres en posiciones de decisión asuman la responsabilidad de promover dicho conocimiento, mediante los estudios, investigaciones y consultas populares que sean requeridos. En segundo término, se necesita recuperar la capacidad de introducir elementos de justicia social en el desarrollo, que permitan distribuir en forma más equitativa los beneficios de la producción, mediante políticas laborales y salariales apropiadas y políticas de promoción de la pequeña empresa, así como la elevación del monto de las pensiones, montepíos, subsidios familiares y otras transferencias, a los grupos más pobres, cuyos ingresos dependen fundamentalmente de dichas transferencias. En tercer lugar, hay que incrementar el gasto social en educación, vivienda, salud y saneamiento ambiental, entre otros, para lo cual se requiere que el Estado obtenga más recursos, a través de una tributación más equitativa. Para ello habrá que producir los cambios políticos que permitan lograr estas reformas. Cuarto, la educación debe ser orientada a producir ciudadanos conscientes del efecto que el consumismo desbocado tiene sobre la sobrevivencia misma de la sociedad, a la vez que personas más preparadas en lo técnico y lo cultural. Quinto, la participación de los grupos mayoritarios en el proceso decisorio de políticas y en la ejecución de los programas de acción debe hacerse realmente efectiva. Esto exige que la descentralización territorial sea aplicada de manera también efectiva, en coordinación con las políticas de carácter nacional.

Estas, entre muchas otras salidas, deberían ser tomadas por el PS como banderas centrales de lucha. Hay que rescatar para el partido su rol de defensor de los intereses populares, entendidos estos intereses como un espectro muy amplio y de muy larga duración. Debemos ayudar a definir la naturaleza y calidad de la estación de llegada.